



EL REGRESO DE LA IZQUIERDA EN EUROPA CENTRO-ORIENTAL

Carla TONINI

La derrota sufrida en las elecciones del mes de mayo de 1994 por el Forum Democrático, el partido que dirigió el proceso de reforma en Hungría, y la vuelta del Partido Socialista, ex comunista, a la dirección del país, confirman una tendencia existente en toda Europa centro-oriental.

Lituania es el primer país que ha cambiado de rumbo, con la victoria del Partido Democrático del Trabajo de Algirdas Brazauskas en las elecciones de 1992, seguida por Polonia, donde los ex comunistas y sus aliados del Partido Campesino han conquistado la mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones de septiembre de 1993. La popularidad de la que go-

zan los partidos de la antigua izquierda en los países del Este europeo se ve confirmada por los sondeos preelectorales de la República Eslovaca, donde el Partido de la Izquierda Democrática roba simpatizantes al nacionalista Meciar.

En Rusia, la atención de los observadores se ha centrado en el espectacular resultado

Las víctimas más ilustres de la nueva ley electoral polaca han sido los partidos católicos, incluido el nacido en apoyo a la candidatura de Walesa en 1990.

obtenido por el nacionalista Zirinovski, pero en realidad son las fuerzas del antiguo régimen, los comunistas y los agrarios, los auténticos vencedores de las elecciones del mes de diciembre de 1993. En la Duma, la coalición de izquierdas es la que en este momento impone la desaceleración de las reformas impulsadas por los colaboradores del presidente Yeltsin.

Una reflexión sobre el voto en Europa centro-oriental, en los países que han seguido el proceso de salida del comunismo, puede resultar útil para comprender las razones del giro que se ha producido tan sólo cuatro años después de la caída de los regímenes comunistas, así como para trazar las líneas del futuro desarrollo de las reformas en los terrenos económico y político.

El triunfo de las izquierdas en Polonia

En las elecciones polacas de septiembre de 1993, los partidos más votados fueron la Alianza de la Izquierda Democrática (SID) y el Partido Campesino (PSL), herederos del Partido Comunista y de la Unión Campesina, aliados de gobierno en el régimen anterior. Los dos partidos, con el 20,41% y el 15,4% de los votos, respectivamente, duplicando las preferencias respecto a las anteriores consultas del otoño 1991, aventajaron en muchos puntos a los partidos del gobierno saliente, dirigido por Hanna Suchocka, de la Unión Democrática.

Al éxito de la antigua izquierda se sumó el de la nueva, representada por la Unión del Trabajo (UP), la pequeña formación surgida de Solidaridad, que del 2% en las anteriores elecciones pasó al 7,28% en las últimas.

Los grandes derrotados han sido los partidos impulsores de las reformas económicas y políticas formados a partir de la disgregación de Solidaridad: la Unión Democrática (UD), el partido símbolo del cambio, pasan del 12 al 10,59%, mientras los liberales (KLD), los grandes defensores del libre mercado, con el 3,99%, la Unión de Centro (PC), con el 4,42%, la Alianza Campesina, con el 2,37%, y Solidaridad, con el 4,9%, reducen a la mitad los porcentajes de votos obtenidos en 1991.

Para todos estos partidos, a excepción de la Unión Democrática, el descenso de los votos ha supuesto la exclusión del Parlamento. En efecto, las disposiciones de la nueva ley electoral, que introdujo una cuota mínima del 5% para los partidos y del 8% para las coaliciones, llevaron al Parlamento a sólo seis partidos. Además de los tres partidos de la izquierda y de la Unión Democrática, superaron el mínimo solamente la Confederación para una Polonia Independiente (KPN), el primer partido nacido en la clandestinidad a finales de los años setenta, y el Bloque Apartidista para las Reformas (BBWR), la nueva formación nacida poco antes de las elecciones por iniciativa del presidente Walesa, que obtuvieron, respectivamente, el 5,77 y el 5,44% de los votos.

Las víctimas más ilustres de la ley electoral han sido los partidos católicos, tanto la Coalición Patria (Ojczyzna), formada por la Unión Cristiana Nacional (ZCHN) y por la Convención Polaca (KP), a su vez una agrupación de tres partidos democristianos, que obtuvo el 6,37%, como la Unión de Centro, el partido nacido en apoyo a la candidatura de Walesa en las elecciones presidenciales de 1990.

La primera gran novedad de las elecciones de septiembre de 1993 es la inversión de la respuesta surgida de las primeras elecciones semi libres de junio de 1989. En esa ocasión Solidaridad obtuvo una victoria sorprendente, mientras que los partidos comunistas, el Partido Campesino y el Partido Democrático, aliados de gobierno en el régimen anterior, no lograron obtener la mayoría que les habían garantizado los acuerdos firmados por el gobierno Jaruzelski y por la oposición de Solidaridad en abril del mismo año. Los resultados de esas elecciones dieron lugar al primer gobierno no comunista dirigido por el católico Tadeusz Mazowiecki y abrieron el camino de las reformas necesarias para la construcción de un nuevo sistema político y económico.

También las elecciones de 1991 confirmaron la fuerza de los partidos surgidos de Solidaridad. No obstante las crecientes tensiones en el seno de las fuerzas post-Solidaridad y de su incapacidad de construir coaliciones estables, la pertenencia al movimiento anticomunista de los años ochenta había constituido el factor común legitimador del ejercicio del poder. Durante cuatro años los partidos herederos de Solidaridad se sucedieron en el gobierno del país, y en la primavera de 1992 formaron una amplia coalición decidida a proseguir con las reformas emprendidas en 1989.

Con todo, y a pesar de los esfuerzos realizados para consolidar el marco político y a la aprobación de determinadas leyes fundamentales para la reforma del Estado y de la economía, el gobierno del Primer Ministro Hanna Suchocka no logró el apoyo del Parlamento, disuelto con bastante antelación en mayo de 1993. Las elecciones de septiembre han supuesto el regreso de los partidos herederos del antiguo régimen, los ex comunistas y los Campesinos, conllevando la exclusión de la mayor parte de los partidos post-Solidaridad del Parlamento y empe-

Las elecciones de 1993 supusieron en Polonia el regreso de los herederos del antiguo régimen y la exclusión de los partidos post-Solidaridad.

zando una nueva fase en las vicisitudes de la Polonia post-comunista.

La segunda novedad de estas elecciones radica en la ausencia del Parlamento polaco de los partidos católicos, tanto de la Alianza Patria, que en torno al fundamentalista ZCHN había intentado agrupar a algunos movimientos católicos moderados y había recibido el apoyo tácito del episcopado polaco, como de la Unión de Centro, que muchos consideraban el núcleo de un futuro partido democristiano.

Así pues, la muy católica Polonia ha elegido un Parlamento de mayoría laica en el que luchan unidos la izquierda y la derecha nacionalista, representada por la Confederación por una Polonia Independiente, contra las injerencias de la Iglesia en la vida pública. Además, los ex comunistas y la Unión del Trabajo se han erigido en impulsores de la revisión de la ley que limita el derecho al aborto, aprobada a principios de 1993 en medio de intensas polémicas.

En el centro del arco parlamentario está situada la Unión Democrática, el partido que agrupa a los católicos y a los laicos y que sostiene posturas muy distintas sobre temas relacionados con la presencia de la Iglesia en la sociedad, y el BBWR de Waleśa, que, aunque se define como partido cristiano-liberal, ha preferido omitir los problemas relacionados con la Iglesia católica en Polonia. La defensa de los valores cristianos queda, por tanto, confiada al Partido Campesino, el ex aliado de los comunistas

que, tras la derrota de los partidos católicos en las elecciones, pretende recuperar su papel histórico de garante de las conquistas de la Iglesia en el terreno civil.

La revancha de los ex-comunistas en Hungría

El triunfo del partido socialista, ex comunista, en Hungría, es aún más espectacular que el de la Alianza de la Izquierda Democrática, la cual ha podido conquistar la mayoría en el Parlamento gracias a la unión con el Partido Campesino. En la segunda vuelta electoral, realizada el 29 de mayo de 1994, el Partido Socialista Húngaro (MSZP) casi duplicó las preferencias respecto a la primera vuelta del 8 de mayo, obteniendo el 53% de los votos, equivalentes a 208 del total de 386 escaños del Parlamento.

Paralelamente al triunfo de los socialistas de Gyula Horn, ex ministro de Exteriores en el último gobierno comunista, se ha producido la derrota del Forum Democrático (MDF), el primer partido en las elecciones del 1990, con el 24,71%.

No obstante el gradual avance de las reformas económicas y el intento de conservar un carácter moderado de centro, el Forum Democrático ha pagado duramente la gestión del cambio en Hungría y con el actual 9% ha pasado al tercer lugar, precedido incluso por la Alianza de los Demócratas Libres (SZDSZ), que logró el 18% de los votos.

No obstante el avance de las reformas económicas, en Hungría el Forum Democrático ha pagado duramente la gestión del cambio.

La respuesta de las urnas ha castigado a los aliados de gobierno del Forum, el Partido Demócrata Cristiano Popular (FKGP) y el Partido Independiente de los Pequeños Propietarios (FKGP), que pasaron, respectivamente, del 6,45% y del 11,73% de 1990 al 5 y al 7% en las últimas, pero también a la Alianza de los Jóvenes Demócratas (FIDESZ), el partido de oposición que hasta hace pocos meses se consideraba el candidato que vencería en las elecciones.

Los Jóvenes Demócratas obtuvieron todavía menos votos en la segunda vuelta y con su 5% obtuvieron un resultado muy alejado del 30% que le atribuían los sondeos a principios de 1993. El suspenso de los Jóvenes Demócratas es un síntoma de la voluntad de los electores de castigar, junto al partido del Gobierno, a todos los partidos que de alguna manera compartían su política.

En los últimos años, la Alianza de los Jóvenes Demócratas había renunciado a su férrea oposición al gobierno y, tras imponer un giro conservador al partido, había comenzado una nueva aproximación al Forum Democrático, con el que compartiera con anterioridad una campaña de tonos intensamente anticomunistas. Un serio golpe a la popularidad de los Jóvenes Demócratas fue fruto del reciente descubrimiento de su implicación en un escándalo económico relacionado con la venta de bienes inmuebles propiedad del Estado, con la complicidad del Forum Democrático.

La respuesta de las urnas no ha eximido a los partidos aliados del gobierno del Forum, los Pequeños Propietarios y los Cristiano Populares.

Sus pretensiones de distanciarse de la política del Primer Ministro Josef Antall —el Partido de los Pequeños Propietarios abandonó el Gobierno en 1992, aunque dejó que una parte de sus diputados lo apoyasen—, no ha convencido a los electores, que si-

guen identificándolos con la política anti-popular de la coalición en el poder. El único partido que ha escapado a las iras de los electores es la Alianza de los Demócratas Libres, que, a pesar de la pérdida de más de tres puntos en porcentaje, conserva el puesto de segundo partido en el Parlamento.

Los Demócratas Libres han visto premiada su política de progresivo acercamiento al Partido Socialista, con el que en los últimos tiempos han luchado en defensa de los derechos civiles y en nombre de los valores de la socialdemocracia.

Hungría acudió a votar con una compleja ley electoral, aprobada en octubre de 1989, en virtud de la cual 176 de los 386 escaños deben asignarse en votación uninominal en dos vueltas, 152 sobre una base regional con cálculo proporcional y cuota mínima del 4% de los votos, y 58 reservados a una lista nacional basándose en el resto de votos.

El sistema electoral ha hecho posible la eliminación de las fuerzas políticas más pequeñas y la entrada en el Parlamento de sólo seis partidos, los mismos que estaban presentes en la legislatura anterior, los ex comunistas, los Demócratas Libres, el Forum, los Pequeños Propietarios, los Democristianos y los Jóvenes Demócratas.

Con todo, en la pasada legislatura la ley electoral húngara demostró que no es suficiente para eliminar el fenómeno de la fragmentación política. En poco tiempo surgieron disensiones internas en distintos partidos con la renuncia de diputados a los grupos parlamentarios a los que estaban adscritos, con el paso de diputados a otros grupos o con la creación de otros nuevos. En la víspera de las elecciones de mayo, en el Parlamento húngaro había diecisiete partidos, solamente dos menos que los que entraron en liza en las elecciones de 1990.

En efecto, casi todos los partidos sufren conflictos que los debilitan, que minan la estabilidad política del país y que hacen sumamente frágiles las coaliciones de gobierno. En el Forum Democrático han surgido dos corrientes, la librecambista del desaparecido Primer Ministro Antall y la nacional-populista de Istvan Csurka, que es ahora partidario de la intervención del Estado en la economía, contrario a la entrada de capitales extranjeros en el país y a la presencia de elementos extraños a la nación en los cargos del Estado.

Durante los meses de enfrentamientos que precedieron a la expulsión del grupo nacional-populista del Forum, Csurka y sus seguidores protagonizaron una continua campaña de acusaciones contra el Presidente del Forum y Primer Ministro Antall, reprochándole que fuera bien demasiado liberal, bien demasiado procomunista, y combatieron la mayor parte de las propuestas de ley presentadas por el Gobierno. Al mismo tiempo, un conflicto similar al que estallara en el seno del Forum Democrático se producía en el partido de los Jóvenes Demócratas, divididos entre los partidarios de una línea más conservadora en economía, prelude de una aproximación al Forum, y los impulsores de una alianza con los liberaldemócratas y, a través de éstos, con los ex comunistas.

En contraste con los partidos herederos de la oposición al pasado régimen, el partido socialista, ex comunista, ha conservado, en los últimos años, un perfil homogéneo y unitario.

Al contrario de otros, el partido socialista húngaro, ex-comunista, ha conservado un perfil homogéneo y unitario.

Las reformas dirigidas a facilitar el tránsito a una economía de mercado provocaron el rechazo de amplias capas sociales.

Nacido en 1989 de la disolución del Partido Socialista Obrero, el MSZP ha logrado captar, como la Alianza de la Izquierda en Polonia, las demandas de los nostálgicos, de los trabajadores desilusionados por las reformas y de la nueva clase empresarial, adoptando un lenguaje tranquilizador ante todo el mundo y prometiendo en las campañas electorales tanto el mantenimiento del Estado social como la continuación de las privatizaciones y la adhesión al mercado europeo.

Sin embargo, muchos opinan que el partido socialista, forzado por la aplastante victoria electoral a formar un gobierno monocolor, no está en condiciones de satisfacer las expectativas creadas en los últimos tiempos. Para los que piensan así, los socialistas pretenden formar gobierno con los Demócratas Libres, con los que afirman que pueden llegar a un entendimiento en muchos puntos.

En la primera conferencia de prensa posterior a su victoria, Gyula Horn no dejó dudas sobre la diferencia entre promesas electorales y dura realidad, y anticipó un periodo de lágrimas y de sangre para los húngaros que le dieron su voto.

Las razones del voto

Después de las elecciones polacas de 1993, los partidos excluidos del Parlamento dirigieron fuertes críticas a la ley electoral, considerada responsable de la transforma-

ción del éxito de la izquierda en una victoria aplastante. Gracias a la mayoría obtenida, en efecto, el partido ex comunista y el Partido Campesino, que obtuvieron el 36% de los votos, disponen de 303 escaños sobre 460 en la Cámara y de 76 sobre 100 en el Senado. Por primera vez en la historia de la Polonia ex comunista, una coalición de dos partidos goza de mayoría absoluta en el Parlamento. La presencia en el Parlamento de la Unión del Trabajo, que ha asegurado su apoyo a un gobierno formado por la Alianza de la Izquierda y por el Partido Campesino, refuerza todavía más a las izquierdas que ocupan las tres cuartas partes del Parlamento.

En Hungría, el éxito de los socialistas se debe en parte a la campaña electoral realizada por los partidos del centro derecha bajo el emblema del anticomunismo y de su plena abjuración del régimen anterior, presentado por los medios de comunicación como una secuencia ininterrumpida de horrores y de destrucciones. Ni las disposiciones de la ley, ni la existencia de un aparato de partido, que los ex comunistas y los partidos aliados heredaron casi intacto del antiguo régimen, bastan, con todo, para explicar la derrota de los partidos herederos de la oposición y con ellos del proyecto de transformación del Estado y de la economía de la que se hicieron portavoces tras la victoria en las primeras elecciones libres de 1989-90.

Fortalecidos por aquel éxito electoral, los gobiernos post-comunistas de Tadeusz Mazowiecki en Polonia y de Josef Antall en Hungría, decidieron efectuar una serie de reformas cuyo objetivo recaía sobre la estabilización de la economía, el desmantelamiento del sistema de planificación y el tránsito a la economía de mercado.

La fase de estabilización comprendía recortes en los gastos de presupuesto, la abolición de los subsidios a las empresas estata-

les de los sectores industrial y agrario, la reducción de la mano de obra excedente. Paralelamente, la liberalización de los precios y la abolición de las restricciones a las importaciones abrirían el camino a la economía de mercado y sentarían las bases para el traspaso de la propiedad estatal a manos privadas.

Los resultados positivos obtenidos gracias a la introducción de las medidas de austeridad, como la merma de la inflación, la convertibilidad interna de la moneda, la reaparición de mercancías en las tiendas y la formación de una sólida economía de mercado, no han evitado sin embargo el aumento de la protesta por parte de los sectores de la sociedad forzados a pagar, en términos de disminución del nivel de vida y de desocupación, el tránsito hacia el capitalismo.

Los motivos de la protesta son múltiples y no pueden ser achacados sólo a los sacrificios que los ciudadanos del Este se ven obligados a afrontar en el primer periodo de la transición. En realidad, la introducción de las reformas ha conllevado la destrucción de la red de intereses que se habían constituido en los años anteriores en torno a la economía socializada, gracias sobre todo a las disfunciones que han caracterizado el desarrollo y que han abierto espacios crecientes a la economía sumergida.

A partir de los años setenta es cuando la «segunda economía» se convierte en la fuente de ingresos seguros para gran parte de los polacos y de los húngaros que ofrecen servicios, valiéndose de los materiales y de los conocimientos adquiridos en el puesto de trabajo estatal, o que distribuyen bienes sustraídos a la economía principal. La economía sumergida permite unos ingresos añadidos superiores a los que ofrece el primer trabajo, y se traduce a menudo en divisas. La caída de la economía estatal constituye una amenaza principalmente para los

grupos sociales que en la fase final del régimen conquistaron amplios privilegios en la gestión y en el control de las empresas estatales.

Cercanos ya los pactos con la oposición que darían principio a la transición económica, los gobiernos comunistas introdujeron algunas leyes que permitirían a la vieja clase política transformarse en la nueva clase empresarial. Así, a finales de los años ochenta se concedió a los *managers* de la industria la posibilidad de crear un sector privado en el seno de la economía estatal, a través de la constitución de sociedades privadas hacia las cuales podían dirigir las actividades de la empresa o vender parte de la misma a inversores de fuera.

En Polonia y en Hungría el poder de los directores de empresa estaba contrarrestado por las prerrogativas de control que las leyes de los años ochenta atribuyeron a los consejos obreros. El poder decisorio que los órganos de autogestión poseen en casi todas las decisiones que atañen a la empresa, incluida la de la probable venta, fuerza a los directores de las fábricas a hacer concesiones salariales a los obreros o a implicarlos en el proceso de gestión privada de la misma. El giro dado a las reformas tras el triunfo en las primeras elecciones del 1989-90, constituía un intento de invertir la lógica impuesta por la privatización «espontánea» y de volver a encauzar el proceso para ponerlo bajo el control de las autoridades centrales. Pero la respuesta de *managers* y de obreros al recorte de los subsidios estatales

Los potenciales actores del cambio económico se convirtieron en defensores del papel del Estado en la economía.

a las empresas y al bloqueo de los salarios fue el intento de retrasar todo lo posible las privatizaciones, negándose a pagar los impuestos del Estado, subiendo los precios de los artículos producidos, vendiendo parte de las empresas y aumentando los salarios.

Al final, el frente antirreforma se vio ampliado cuando los gobiernos post-comunistas tomaron la decisión de reglamentar el funcionamiento del sector privado no estatal, que se multiplicaba gracias a la falta de reglas y a la conquistada libertad de mercado. El intento de someter a control y a gravámenes las miles de pequeñas empresas, tropezó con la inmediata oposición de los nuevos empresarios y, en muchos casos, éstos se vieron impulsados a retomar el camino de la economía sumergida.

Así pues, en vez de liberar las energías ocultas, la introducción de las reformas convirtió a los potenciales actores del cambio económico en defensores del papel del Estado en la economía y en la esfera pública. El proyecto de transformación impulsado por la nueva clase dirigente y apoyado por los expertos occidentales, demostraba que había pasado por alto la herencia psicológica y material dejada por el régimen anterior.

La exigencia de una profunda transformación de la economía en un sentido capitalista no estaba tampoco en la tradición de las oposiciones polaca y húngara. Durante las crisis que periódicamente sacudían al régimen comunista, la oposición reivindicaba

***La promesa de los partidos
ex-comunistas de reintroducir la
tutela del Estado en la economía sin
duda aumentó su número de votos.***

más bien la devolución a los trabajadores, organizados en la autogestión, del control de la propiedad de la que los había privado una clase de burócratas corruptos. Las investigaciones, realizadas en varias ocasiones en los años ochenta, sobre la actitud de la sociedad frente a las reformas económicas, demostraron desconfianza hacia el capitalismo, entendido como abolición del papel del Estado en la economía.

La defensa de los intereses amenazados por las reformas ha sido la razón principal del triunfo electoral de las izquierdas ex comunistas, representantes tradicionales de la presencia del Estado en la economía. La promesa de la reintroducción de la tutela del Estado, tanto en la industria como en el campo, ha constituido sin duda el criterio fundamental a la hora de votar por partidos de perfiles y de programas idénticos.

Un ejemplo evidente lo brinda el caso de los dos partidos campesinos en Polonia, el PSL, ex aliado de los comunistas, y la Alianza Campesina, heredera de Solidaridad. El primero, tras el congreso de refundación y el cambio del nombre, reanudó la política aneja al movimiento en el periodo de entreguerras, a saber, la de proteccionismo en el terreno económico y la de defensa de los valores cristianos, aproximándose así a las posiciones del partido nacido de Solidaridad. Los dos han formado parte de los gobiernos post-comunistas, los dos los abandonaron en protesta contra la decisión de eliminar la red de protección de los productos agrícolas. Con todo, la identificación de la Alianza Campesina con la tendencia pro-reforma, ha hecho que los electores prefieran al PSL, ex aliado de los comunistas y garante tradicional del *status quo* en el campo.

La primacía otorgada a los temas económicos y sociales en la campaña electoral, explica en parte la derrota de los partidos católicos polacos, que centraron su batalla

electoral en los grandes temas de la identidad nacional y religiosa y relegaron los temas relacionados con la economía. La opción de recalcar la llamada a la defensa de la nación y de la religión los llevó a dejar en un segundo plano el debate y el enfrentamiento sobre el naciente sistema y a rebajar las diferencias concernientes al programa económico, que sin embargo existían. La Unión de Centro y los partidos democristianos apoyan la economía de mercado, mientras que la Unión Cristiana Nacional y los grupos de la derecha se declaran a favor del mantenimiento del sector estatal en la economía. De tal modo, una parte de las fuerzas moderadas y pro-mercado, los democristianos y el partido conservador, ha optado por formar una alianza electoral con los cristianos nacionales, sumándose a la gran campaña por la descomunización, la depuración de los miembros del partido comunista, de los agentes secretos y de sus colaboradores en la administración estatal.

Sin embargo, el factor nacional y el religioso han tenido escasa influencia entre un electorado que en muchos casos ha preferido votar por los partidos que, aunque adscritos a los valores cristianos, presentaban un programa bien definido, como la Unión Democrática y el BBWR de Walesa, o que ha optado por no votar. La escasa participación en las urnas (sólo acudió a votar el 50%) es una señal de que, en un país en el que todavía hoy el 90% de los ciudadanos se declara creyente, gran parte del electorado católico no ha hallado su representación política propia.

Al aumento de las incertidumbres del elector católico ha contribuido la posición adoptada por el episcopado durante la campaña electoral. Las directivas de la jerarquía católica manifestaban la preocupación por un posible regreso de las izquierdas al poder, pero al mismo tiempo contenían fuertes críticas contra el capitalismo y la ideología del consumismo, principales responsables,

***En Polonia, la transición
democrática pacífica y pactada
impidió la abjuración
del pasado comunista.***

según ellos, de la erosión de los valores católicos tradicionales.

En términos más generales, el voto de septiembre ha revelado la presencia de fuertes elementos de protesta frente a la creciente injerencia de la Iglesia católica en la vida pública del país.

Basándose en la tradición de Polonia y en el enorme apoyo que la sociedad le tributara en los años pasados, la jerarquía católica consideró natural la reconquista, tras la caída del comunismo, de los privilegios de los que había disfrutado antes de la Segunda Guerra Mundial y que, tras años de conflictos, el propio régimen comunista le había concedido. Una ley de 1989 reconocía a la Iglesia el estatus jurídico y abría el camino a amplias concesiones en los terrenos económico y civil, que iban de la devolución de los bienes confiscados en la posguerra a exenciones fiscales y al acceso a los medios de comunicación.

En las intenciones de la Iglesia polaca, la restitución del poder económico perdido no era más que el primer paso para volver a desempeñar un papel central en la formación de las bases éticas del nuevo sistema.

Convencida de la importancia de su misión, la Iglesia protagonizó, y venció, algunas importantes batallas en el terreno civil, como las relativas a la introducción de la enseñanza de la religión católica en los colegios, la limitación del derecho al aborto, la aceptación de los valores cristianos como

***El pasado comunista se presenta
ahora como un periodo de
conquistas sociales y materiales que
hay que defender a toda costa.***

base de la ordenación del nuevo Estado y como reglas generales que los medios de comunicación han de respetar.

Sin embargo, este tránsito a la esfera del poder ha sido acogido negativamente por la sociedad, que ha considerado el nuevo papel de la Iglesia como una traición de los ideales de justicia e igualdad que aquélla defendió durante el comunismo. Para los disidentes de formación laica, que en los años anteriores habían llegado a un pacto con la Iglesia sobre la base de la adhesión común a dichos valores, la Iglesia del post-comunismo infringía las reglas de la separación del poder civil y el religioso, considerada una premisa fundamental para la construcción de un orden democrático.

Así pues, el debate relativo a la relación Estado-Iglesia ha ido cobrando una importancia creciente en la Polonia post-comunista y ha contribuido a la polarización del escenario político, causando las primeras divisiones en el seno del movimiento católico, entre aquellos que aceptan incondicionalmente las actuaciones de la Iglesia y aquellos que preferirían una Iglesia menos implicada en la política. Justamente sobre la cuestión de las relaciones Estado-Iglesia se han producido las primeras escisiones en los partidos de inspiración cristiana: de la Unión Democrática ha salido la fracción de los conservadores, favorable a una política de más claro apoyo a la Iglesia, mientras que de la Unión de Centro, considerada el núcleo de un futuro partido democristiano, se han alejado los grupos de inspiración nacional.

Las recientes elecciones polacas y húngaras marcan un giro fundamental en la historia de la Europa centro-oriental post-comunista. El triunfo de las izquierdas simboliza la ruptura de las líneas de demarcación que las primeras elecciones de 1989-90 trazaron entre los partidos herederos del antiguo régimen y los que se adscribían a los movimientos de oposición y a los valores que éstos representaban: democracia frente a socialismo, libre mercado frente a economía centralizada, pertenencia a Europa frente a dependencia del ex bloque soviético.

Al mismo tiempo, el regreso de las izquierdas al poder es expresión de una nueva separación, la que ve de un lado a los defensores de los derechos creados por el sistema anterior y, del otro, la de aquellos que tratan de acabar con estos derechos para crear otros nuevos.

Este cambio es el resultado de las reformas que han repercutido sobre las categorías sociales, pero también tiene causas que se retrotraen a la naturaleza misma de la transición producida sobre una base contractual. El acuerdo firmado entre el gobierno comunista y la oposición permitió el tránsito no violento a la democracia, pero al tiempo comportó la renuncia a realizar una ruptura radical con el pasado.

La «paz civil» propuesta por los nuevos equipos, basada en la construcción de un sistema político y económico en el cual los ciudadanos, prescindiendo de su implicación en el antiguo régimen, eran llamados a cooperar, se ha convertido en la absolución de las culpas de aquellos que llevaron al país a la bancarrota económica y que en la nueva realidad podían mantener los privilegios que habían adquirido con anterioridad.

Gracias a ello, los partidos del antiguo régimen han mantenido intacto el aparato or-

ganizativo y el patrimonio acumulado, y han evitado la abjuración del pasado, que ahora se presenta como un periodo de conquistas sociales y materiales.

Por el contrario, las élites nacidas de la oposición están ahora inmersas en una lucha política que se combate mayormente en el terreno personal, sostienen la necesidad de continuar las reformas sin tener en cuenta la protesta social y, en definitiva, se han convertido en las principales responsables del fracaso del tránsito a la democracia y al bienestar de marca occidental.

El escenario post-electoral polaco

La consolidación del escenario político era uno de los objetivos que el último gobierno de Solidaridad se proponía alcanzar, al aprobar, en la primavera de 1993, la nueva ley electoral.

Las reglas introducidas por la ley, cuota mínima de votos para la entrada en el Parlamento de partidos y coaliciones, debía servir para reducir la fragmentación del Parlamento y alentar a las fuerzas políticas a construir alianzas ante las elecciones. Al mismo tiempo, el premio de la mayoría, asignado a los partidos que accedían al Parlamento, y la distribución de determinado número de escaños de una lista nacional, para cuya inscripción era necesario rebasar el 7% de las preferencias a nivel local, reforzarían a los partidos vencedores en las elecciones y permitirían la formación de gobiernos estables.

Por lo que respecta a la fragmentación del Parlamento y a la estabilidad del escenario político, la ley electoral ha logrado resultados positivos: después de las elecciones, los partidos parlamentarios han pasado de veintinueve a seis, mientras que los partidos favorecidos en las elecciones han conquistado una mayoría tal que per-

El conflicto entre los partidos pro-reforma de Mazowiecki y Walesa favorece a los partidos ex-comunistas y campesinos.

mite la formación de un gobierno duradero. Por otra parte, la cuota mínima ha fracasado en su objetivo de empujar a las fuerzas políticas a formar alianzas electorales, como en el caso de los partidos católicos del centro y de la derecha, muchos de los cuales han preferido presentarse separados a las elecciones. Ya en fase post-electoral, la esperada cristalización política sigue sin producirse, dado que las antiguas divisiones entre una derecha católica nacionalista y contraria a las reformas y un centro moderado persisten todavía.

Así, ha resultado fallido el proyecto de los partidos del Gobierno, que introdujeron las nuevas reglas dando por sentado el mantenimiento de las relaciones de fuerza que se habían instaurado en el Parlamento en los años del post-comunismo, y por ende la confirmación del papel central de las fuerzas políticas herederas de Solidaridad y la posibilidad de racionalizar el sistema de las coaliciones a través de la cooptación de aquella parte de la oposición que hubiese apoyado las reformas.

El resultado, en cambio, ha sido la reducción en el Parlamento de las fuerzas pro-reforma, ahora representadas por la Unión Democrática y por el BBWR, cuyos líderes, Mazowiecki y Walesa, antiguos aliados en el sindicato y acérrimos enemigos tras su disolución, se combatieron con aspereza en la campaña de las presidenciales, abriendo un conflicto que parece insoluble.

La mayoría absoluta de la que disponen los ex comunistas y el Partido Campesino parece que ha mermado los poderes que la Pequeña Constitución concede al Presidente de la República en la fase de la formación del Gobierno. En efecto, la carta transitoria, aprobada en septiembre de 1992, concede al presidente plena libertad en el nombramiento del Primer Ministro, que puede ser elegido incluso al margen del sistema parlamentario, y al que encarga la formación del Gobierno.

Sin embargo, la última palabra en la formación de un nuevo gobierno la tiene el Parlamento, que puede expresar su desconfianza al gobierno del presidente y en el plazo de una semana nombrar un Primer Ministro de su elección. La libertad del presidente suponía, pues, un apoyo en el Parlamento que la victoria de las izquierdas y la mayoría que detentan las mismas ha anulado, obligando al jefe de Estado a aceptar al candidato elegido por aquéllas y a conformarse con imponer el nombramiento de algunos ministros —Interior, Defensa, Exteriores—, que es prerrogativa que le concede la Constitución.

La posición de Walesa se ha visto todavía más debilitada por la decisión, anunciada por los ex comunistas y por el Partido Campesino, de llegar a la aprobación de una nueva Constitución antes del término del mandato presidencial, a finales de 1995. Los proyectos a examen contemplan una notable reducción de los poderes del presidente y el afianzamiento de las prerrogativas del Parlamento.

La preponderancia de los partidos de izquierda en el Parlamento polaco compromete el equilibrio de la democracia.

A todo ello hay que sumar el aislamiento de Walesa en el escenario político tras la ruptura con sus aliados católicos, que lo acusan de ser el principal responsable de la victoria de las izquierdas, victoria que estiman resultado de la política del llamado «equilibrio» que el Presidente ha seguido desde su nombramiento en noviembre de 1990.

Walesa postuló al máximo cargo del Estado porque estaba convencido de que tan sólo un presidente de la república en condiciones de actuar como árbitro supremo del escenario político podría garantizar la formación de un sistema democrático estable, en el cual las fuerzas políticas pudiesen actuar libremente pero en el que ninguna fuese capaz de conquistar el monopolio del poder.

Según el Presidente, el primer paso que había que dar para el cumplimiento de dicho objetivo consistía en sacar a la luz los conflictos latentes en el seno de Solidaridad, de cuya disgregación nacerían los partidos que en una fase inmediatamente posterior se colocarían en el marco tradicional de la izquierda, el centro y la derecha.

Una vez alcanzado el equilibrio de las fuerzas políticas, sería tarea del jefe de Estado su mantenimiento, minando el poder de los partidos demasiado fuertes y reforzando el de los débiles. Contra el gran poder de las nuevas élites surgidas de Solidaridad, Walesa se enfrascó en una lucha abierta y, lanzando su eslogan de «pierna derecha, pierna izquierda», con el que señalaba la necesidad de equilibrar el poder de las fuerzas políticas, se opuso a todas sus iniciativas en el terreno legislativo, debilitando las posiciones y contribuyendo al afianzamiento de los partidos del antiguo régimen.

La postura conciliadora que Walesa ha demostrado ante las fuerzas de la iz-

quiera que llegaron al poder tras las elecciones es, sin embargo, sólo aparente. En efecto, su éxito electoral ha confirmado al viejo líder de Solidaridad la necesidad de restablecer el equilibrio de la democracia, comprometido por la preponderancia de las fuerzas de la izquierda en el Parlamento.

Si las esperanzas de reconstruir una oposición al gobierno de las izquierdas parecen extinguidas después de su ruptura con los partidos católicos, al Presidente le queda abierto el camino de aprovechar las debilidades de la coalición de gobierno. Los ex comunistas y el Partido Campesino, ganadores en las elecciones y aliados en la coalición de gobierno, están más vinculados por su común herencia del antiguo régimen que por coincidencias de programa. La Alianza de la Izquierda Democrática es una coalición de cerca de 28 organizaciones, de las que forman parte comunistas nostálgicos, representantes del viejo sindicato del régimen, pero cuyo pilar está constituido por la socialdemocracia polaca, a la que se han adherido muchos de los llamados «comunistas pragmáticos», que antes pertenecían a la *nomenklatura* del partido y que luego se convirtieron en empresarios y, en consecuencia, en partidarios del libre mercado. Mientras los sindicatos del antiguo régimen llevaban la campaña electoral con la promesa de la reintroducción de la tutela del Estado, los diputados de la socialdemocracia apoyaban en el Parlamento la propuesta del gobierno dirigido por la Unión Democrática de realizar el plan para la privatización masiva.

El programa de la socialdemocracia, continuación de las reformas y contención de los gastos presupuestarios dentro de los límites impuestos por el Fondo Monetario Internacional, acercan a este partido más a la Unión Democrática de Mazowiecki que al Partido Campesino, con el que ha formado

gobierno. Este último, en efecto, se propone como el defensor de los intereses del campo, considerados prioritarios respecto a los de los restantes sectores de la economía, y promete, mediante la reintroducción de subsidios a la agricultura y de limitaciones a las importaciones de Occidente, el mantenimiento de la estructura agraria heredada del comunismo y basada en una red de propiedades de pequeñas dimensiones. Al mismo tiempo, la oposición manifestada por el Partido Campesino a la privatización y a la integración a breve plazo en la comunidad europea, ha recibido el apoyo de la pequeña clase empresarial que se enfrenta a la severa política fiscal introducida en la segunda fase de las reformas.

El compromiso al que se ha llegado para la formación del Gobierno —y basado en la asignación del cargo de Primer Ministro al líder del Partido Campesino y de los ministerios clave de la economía a los ex comunistas—, ha resuelto temporalmente las tensiones entre los dos partidos. Ahora bien, la amenaza a la estabilidad de la coalición viene de las dos alas que conviven en su seno: por un lado, la populista que promete un regreso al puro proteccionismo; por otro, la favorable al libre mercado, regido de acuerdo con las reglas dictadas por los grandes *businessmen* de las empresas estatales y por la pequeña clase empresarial nacional.

El debate sobre el presupuesto, que tuvo lugar a principios de 1994, reveló los primeros contrastes en el Gobierno y abrió

***En Polonia y Hungría
la economía de mercado
está sólidamente constituida,
aumenta el producto social bruto
y se ha estabilizado el paro.***

***Los líderes de los partidos
del antiguo régimen pertenecen
a una nueva generación
de inspiración occidental.***

nuevos espacios de maniobra al presidente Walesa, que, valiéndose de las prerrogativas de veto a la legislación parlamentaria que le atribuye la Pequeña Constitución, ha aprovechado todas las oportunidades para enfrentar entre sí a los dos aliados de la coalición y para introducir elementos de inestabilidad en la vida política.

Sus reiteradas amenazas de no firmar determinadas leyes, como la de las obligaciones de compensación para ciertos productos agrícolas y la ley sobre el presupuesto, así como su negativa a nombrar al candidato del SLD para el cargo de ministro de Economía tras la dimisión de su antecesor, han tenido el doble efecto de paralizar la actividad política y la de hacer caer una vez más los índices de su popularidad en los sondeos de opinión pública. Con todo, el Presidente no parece demasiado preocupado por la ruptura del consenso. En el fondo, las propuestas formuladas por los ex comunistas en la campaña electoral relativas a la disminución de los poderes de la presidencia, no han tenido continuación, y, a menos de dos años de las elecciones presidenciales, no ha surgido ningún líder capaz de competir con él. Así, Walesa piensa postular una vez más a la presidencia y reconstruir un grupo pro-reforma en el Parlamento, formado por las fuerzas favorables al mercado existentes en los principales partidos, desde la Alianza de la Izquierda al Partido Campesino y a la Unión Democrática. El nuevo partido, que en sustancia vuelve a proponer el proyecto de Bloque en apoyo a las reformas, podría llamarse Bloque del Equilibrio.

El futuro de las reformas

La vuelta de las izquierdas al poder no ha suscitado temores en las instituciones internacionales y en los bancos extranjeros implicados en el proceso de transición de las economías socialistas.

Por una parte, en Polonia y en Hungría la economía de mercado está sólidamente constituida, el producto social bruto está en constante aumento y la inflación y la desocupación, aunque elevadas, no muestran tendencia a aumentar. Por otra, los líderes de los partidos del antiguo régimen, pertenecientes a la nueva generación de inspiración occidental y de estrechos lazos con las finanzas internacionales, constituyen una garantía para los inversores extranjeros.

También del sector de las privatizaciones se esperan sorpresas, tras los radicales cambios que ha experimentado en los últimos tres años la política encaminada a la transformación de la propiedad, y que dejan a Polonia y a Hungría en situación atrasada respecto a la vecina República Checa.

En el primer trienio posterior a la caída del comunismo, sólo una décima parte de las empresas estatales ha pasado a manos privadas, mientras que otro millar ha empezado el largo camino hacia la privatización. El motivo de esta lentitud hay que buscarlo sobre todo en la protesta que, a principios de 1990, siguió a la decisión de los gobiernos polaco y húngaro de introducir una ley que reglase el proceso de las privatizaciones, dejado hasta ese momento a la iniciativa del *management* de las empresas estatales.

Los proyectos de ley contemplaban la posibilidad de emprender tres caminos para realizar la transformación de la propiedad: el de la «capitalización», mediante la cual la empresa es mercantilizada y, aunque permanece formalmente en manos del Estado,

queda abocada a la venta directa, a través de oferta pública de acciones populares; el de la liquidación por quiebra, que afecta a empresas consideradas no rentables, mediante la cual una parte o toda la empresa se pone en venta; y por último el de la cesión en arriendo o *leasing* a sociedades formadas por empleados de la empresa.

Contra la primera variante se dirigió precisamente la oposición de los directores y los empleados de las empresas, que con la venta a particulares perderían el poder de gestión y de control detentados hasta ese momento. La solución más ventajosa para ambos es, en cambio, la de detener el proceso de transformación de la propiedad en la fase de la mercantilización de la empresa, dejando a los interesados la facultad de decidir el destino posterior de la misma: rehacerla a través de las formas más convenientes, vender partes de ella o gestionarla privadamente, descargando sobre el Estado una parte de los costes. La presión conjunta de los grupos directivos y obreros ha dado así lugar a sucesivas modificaciones del texto de la ley, en la que a los empleados de la empresa se les reconoce el derecho de veto sobre las decisiones relativas a la privatización. Tampoco las facilidades concedidas a los interesados, como la exención de algunos impuestos y la posibilidad de bajar el techo fijado a los salarios en el paquete inicial de las reformas, han valido para romper la resistencia de obreros y *managers* a la privatización de la gran industria.

En Polonia, del total de las empresas privatizadas, las cedidas a través de la venta directa suman 200, mientras que las 600 restantes, en su mayoría de pequeñas y medianas dimensiones, han sido cedidas gratuitamente en arriendo o bajo forma de *leasing* a sociedades formadas por los trabajadores y los directivos.

Esta tendencia pro empresas va a ser probablemente reforzada por el gobierno de las

izquierdas, que ve en ellas la única vía para la contención de las protestas sociales.

El mayor peligro de esta opción, aparte del problema de la rentabilidad de las empresas cedidas a sociedades formadas por obreros y *managers*, sigue siendo el de la permanencia de la «privatización paralela» o salvaje. Por un lado, en efecto, la resistencia a privatizar empujará a los directivos a vender parte de la empresa para hacer frente a los costes y, en cualquier caso, dará lugar a la desaparición de la misma del mercado. Por otro, la propiedad de los empleados puede resultar a la postre una forma transitoria de privatización y, dada la escasez de capital del que disponen las sociedades anónimas de obreros y *managers* que han reهicho las empresas, las acciones terminarán siendo cedidas a inversores de fuera.

En Europa centro-oriental son muchos los que consideran que la creciente productividad de las empresas privatizadas, en determinados casos más elevada que la de las privadas, así como la capacidad de absorber desocupación que están demostrando, impulsarán inevitablemente la continuación del proceso comenzado cuatro años atrás.

La excepción a la regla general: la República Checa

En el marco general de inestabilidad política e incertidumbre económica, el caso de la República Checa representa una feliz excepción.

El gobierno de izquierdas polaco favorece a las empresas como única vía para la contención de las protestas sociales.

Tras la crisis que dio lugar a la disolución de Checoslovaquia y al nacimiento de dos estados separados, el gobierno de centro-derecha de Vaclav Klaus retomó el curso de las reformas empezadas en 1990.

En diciembre de 1992 el Parlamento aprobó la nueva Constitución, que liberó la política de los impedimentos jurídicos impuestos por la Constitución estalinista, enmendada después de 1989 y que se mantuvo en vigor hasta la separación de los dos estados, el checo y el eslovaco. En concreto, las nuevas normas fijan claramente los límites entre las prerrogativas del Consejo de Ministros, al que se encomienda el desempeño del poder ejecutivo, y las del Presidente de la República, que tiene funciones de representación, pero conserva cierto grado de control sobre la actividad legislativa del Parlamento. La aprobación de la Constitución reforzó al gobierno de Klaus y a su Partido Cívico Democrático, el principal defensor de la introducción de reformas económicas a breve plazo, de impulsarlas con ayuda de capital extranjero y de una radical privatización.

El éxito de la terapia de choque *a la polaca* es incuestionable: Checoslovaquia era el único país que, a finales de 1993, podía presumir del traspaso a manos privadas de más de la mitad de las grandes empresas estatales. Dicho traspaso fue posible tras la conclusión, también en tiempo récord, de la privatización de la pequeña y la mediana propiedad, de tiendas, hoteles y pisos, todo

***Checoslovaquia realizó
con éxito la privatización masiva
traspasando a particulares el 50%
de la gran industria estatal.***

lo cual era en Checoslovaquia propiedad exclusiva del Estado.

Claro está que Checoslovaquia padece también las incertidumbres y las disfuncionalidades en los terrenos económico y político que son inherentes a los países de Europa centro-oriental en fase de profundas transformaciones.

Tan sólo en la segunda mitad de 1993 las señales de recuperación interrumpieron la tendencia negativa de la economía, debido al descenso de la producción y de las exportaciones y al fenómeno del paro.

Los contrastes en la coalición de centro-derecha gobernante, formada por la Unión Democristiana, por la Alianza Cívico-Democrática y por el Partido Democristiano, son cada vez más frecuentes y han estado relacionados con problemas importantes como el ordenamiento institucional del Estado y las modalidades de la privatización.

Con todo, los aspectos negativos de la transición han tenido un impacto menor en la sociedad checa, que ha aceptado las reglas dictadas por el nuevo equipo en el poder y soporta los costes de las transformaciones económicas sin recurrir a la protesta social, como ocurre en las vecinas Polonia y Hungría.

La rapidez con la que la democracia y la economía de mercado han enraizado en Checoslovaquia parece todavía más paradójica si pensamos en la mediocridad y en el inmovilismo del régimen comunista checoslovaco, donde el sistema de planificación centralizado permaneció intacto hasta los años ochenta, frenando todo intento de apertura a la economía privada. El Partido Comunista se opuso a todo intento de reforma en su seno incluso después de la caída del muro de Berlín, y abandonó la escena como consecuencia de la protesta

popular. Ni siquiera *Charta 77* logró superar la desconfianza y la apatía del pueblo checoslovaco ni ampliar su aceptación.

Sin embargo, precisamente la rigidez del sistema y la no implicación de amplios estratos de la sociedad en el movimiento de oposición al régimen han coadyuvado al éxito de la llamada «revolución desde arriba», que en los restantes países de Europa centro-oriental tropieza con resistencias por parte de los colectivos de trabajadores afectados por las medidas de austeridad dictadas por las nuevas élites en el poder. La protesta de los trabajadores polacos y húngaros está respaldada por la conciencia de los derechos adquiridos en los años de la lucha contra el régimen y por la presencia de los partidos de la vieja y la nueva izquierda, que intervienen en defensa de sus derechos.

En la República Checa, en cambio, los partidos de centro izquierda, tanto el renacido Partido Socialdemócrata y la Unión Liberal y Social, formada por el Partido Socialista, por los Verdes y por el Partido Agrario, como el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, heredero del Partido comunista checoslovaco, no han logrado mantener el consenso alcanzado en las elecciones de 1992, en las que obtuvieron un total de 95 escaños en el Parlamento.

No obstante las afinidades políticas, muy intensas en el caso del partido comunista y de la socialdemocracia, que habrían posibilitado una fuerte oposición al Gobierno, los partidos del centro y de la izquierda están ahora enzarzados en una batalla de fondo ideológico y personal que ha hecho imposible su decisiva participación en las decisiones políticas y económicas tomadas en el Parlamento.

Las disensiones en el seno de cada partido, debidas a la existencia de un ala reformista, que trata de introducir cambios en la

Distinguió a Checoslovaquia del resto de los países del Este la decisión de cortar radicalmente los lazos con el pasado comunista.

estructura del partido, y de un ala conservadora, opuesta al cambio, han dado lugar a la pérdida de popularidad de los partidos de izquierda, como demuestran los sondeos realizados a lo largo de 1993.

Por su parte, el gobierno de Klaus ha sabido combinar hábilmente los criterios de eficiencia y justicia en el terreno político y en el económico.

Checoslovaquia es el primer país del Este que ha realizado con éxito la privatización masiva, basada en la distribución entre los ciudadanos de bonos válidos para la compra de acciones de las empresas estatales en vías de privatización. El programa que, en dos fases sucesivas, ha incluido a cerca de doce millones de checos, ha permitido el traspaso a los particulares de más del 50% de la gran industria estatal. Lo que en realidad distingue a Checoslovaquia del resto de los países de Europa centro-oriental es la decisión con la que, desde los primeros meses de 1990, ha cortado los lazos con el pasado comunista. Aquí la «decomunización», que en Polonia y en Hungría se ha convertido en instrumento de la lucha política por el poder, ha sido encauzada con la aprobación de leyes que han supuesto el apartamiento de la vida pública de los responsables del régimen anterior, de los altos funcionarios del partido comunista y de los agentes del servicio secreto.

Las medidas «depuradoras», aunque limitadas a la prohibición durante cinco años para ejercer cargos públicos a perso-

nas que ocuparon puestos de responsabilidad en el pasado y a la declaración de «ilegitimidad del régimen comunista», cobraron un fuerte significado simbólico para las personas que asistieron a la condena de los culpables y a la rehabilitación de las víctimas.

En efecto, junto a la condena del partido comunista, responsable de la «destrucción de los valores de la civilización occidental»,

de la «decadencia moral y económica del país» y del clima de represión, la ley de julio de 1993 sobre la «ilegitimidad del régimen comunista» contiene un párrafo que rehabilita a las víctimas de la represión y a cuantos opusieron «resistencia al comunismo», incluso mediante el recurso a «actos violentos contra funcionarios del Estado y del partido».

Traducción de César Palma